



ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL MOVIMIENTO COMUNISTA

Nº 63

25 de lo

de 1976

15 Ptas.

TAMBIEN EN ESTE NUMERO:

| | |
|--------------------------------------|-----|
| <i>La Monarquía</i> | |
| <i>al servicio de los EE.UU.</i> | p.2 |
| <i>Un Estatuto de Autonomía</i> | |
| <i>para el País Valenciano</i> | p.3 |
| <i>Las medidas económicas del</i> | |
| <i>Gobierno: el peor continuismo</i> | p.4 |
| <i>El 12 de Noviembre: Jornada</i> | |
| <i>Obrera de protesta y lucha</i> | p.5 |
| <i>La Internacional Socialista y</i> | |
| <i>las barbas de Portugal</i> | p.6 |
| <i>CC.OO. en la encrucijada</i> | p.7 |
| <i>Juan Carlos, Pinochet y Cía.</i> | p.8 |
| <i>Soria nuclear, ¡no!</i> | p.8 |

EDITORIAL

PREGUNTAS

Han pasado casi dos meses desde el día en que el Gobierno de Suárez hizo público su plan de "reforma política". Dos meses, y aún hay partidos en el seno de la oposición que no han manifestado con claridad su posición concreta ante tal plan. El Gobierno ha anunciado un referendun, unas elecciones... ¿qué piensan unos y otros de ese par de cuestiones? Imposible obtener una respuesta clara.

Entretanto, la dirección del Partido Socialista Popular dedica no pocos de sus esfuerzos a condenar los "maximalismos", insinuando que no estaría mal negociar con el Gobierno una mejora de su proyecto, sin rechazar el marco general que en él se propone. El Sr. Gil-Robles y Quiñones, presidente de la Federación Popular Democrática, afirma que considera "una quimera" la as-



Sería muy grave que hubiera partidos democráticos que olvidaran que, bajo las buenas palabras de Suárez, la represión sigue su curso

piración a un Gobierno provisional nacido de la ruptura democrática. Izquierda Democrática subraya por su parte que el proyecto de reforma de Suárez es "un punto de partida", y uno de sus dirigentes declara públicamente que es partidario de la participación en las elecciones convocadas por el actual Gobierno. En fín, la dirección del Partido Socialista Obrero Español pretende no haberse planteado el tema de su actitud ante las elecciones, en tanto que, en el interior de los organismos unitarios de la oposición, centra sus energías en dar un aire cada vez más abstracto e insustancial a las posturas programáticas sobre las que se asientan esas alianzas.

Muchos son los que, tras haber consagrado sus fuerzas a la lucha por la libertad y la democracia, se ven sumidos hoy en el desconcierto por esta situación. Muchos los que quisieran saber a qué atenerse en lo tocante a las posiciones de tales o cuales partidos.

Nosotros pensamos que a ello podría contribuir no poco el que las direcciones de esos partidos dieran respuesta a toda una serie de preguntas elementales. Preguntas tan simples como éstas:

● Ustedes han dado su acuerdo al programa de Coordinación Democrática, en el que se reclama libertad para todos, libertades previas a cualquier consulta electoral, garantía de esas libertades por parte de unos poderes ejecutivos provisionales democráticos, proceso constituyente completo... Ustedes participan en organismos unitarios que reclaman el reconocimiento inmediato del derecho al autogobierno de las nacionalidades. Siendo así, ¿cabe aceptar el marco político de la reforma de Suárez, sabiendo que niega explícitamente todos esos objetivos?

● ¿No está claro que la participación en las elecciones (y en el referendun antes) de una parte de la oposición democrática, permitiría legitimar unas elecciones hechas sin plena libertad, bajo el peso de unas leyes y unas instituciones de carácter franquista?

● El Gobierno de Suárez ha anunciado que quedan excluidos del juego electoral los partidos comunistas y determinadas fuerzas de las nacionalidades. ¿Son Vds. conscientes de que quedaría en entredicho el espíritu democrático de los partidos que aceptaran participar en unas elecciones como esas? ¿No creen que tal comportamiento llevaría a mucha gente a la conclusión de que a esos partidos les movería menos la aspiración a la libertad que el deseo de obtener una ventaja electoral sobre los partidos situados a su izquierda? ¿No les parecería desleal sacar provecho de la represión discriminada que el poder ejerce contra las fuerzas que quedamos "excluidas"?

● ¿Reconocen Vds. que entrar en el juego del Gobierno actual equivale a consagrar un régimen que continuará estando dominado por los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad?

● ¿Por qué no admiten Vds. abiertamente que la participación en la operación reforma del Gobierno va en contra de la posibilidad misma de plantear la desaparición de la Monarquía impuesta, y su sustitución por una República democrática?

● ¿Cómo podría justificarse la participación en el juego de una reforma abiertamente contraria a las exigencias de autogobierno, autonomía y autodeterminación de las nacionalidades y de las regiones, y a la legítima aspiración popular referente a la reestructuración federal del Estado?

La contestación a estas preguntas elementales permitiría aclarar muy sustancialmente el panorama político. Sin embargo, mucho nos tememos que estas preguntas vayan a seguir sin respuesta. Convendrá entonces preguntarse ya sin más preámbulos, por el significado de ese silencio.

La monarquía, al servicio de los EE.UU.

En los últimos días, la prensa se ha hecho eco de dos noticias particularmente alarmantes. Dos noticias que muestran ambas como ésta sacrificando la monarquía lo que queda de la independencia y de la soberanía de España.

La primera de ellas se refiere al hecho de que, al parecer, el **Tratado de Amistad y Cooperación**, firmado recientemente con los Estados Unidos, contiene unas cláusulas secretas, según las cuales el imperialismo norteamericano tendrá aún más libertad para servirse del territorio español con fines militares.

El periódico **Washington Post** ha afirmado que esas cláusulas "permiten la utilización de las bases aéreas conjuntas y de los aeropuertos regulares en territorio español por los aviones norteamericanos que transportan material militar a otros países, entre ellos Israel".

De esta forma se legaliza una situación de hecho, pues era ya un secreto a voces que España servía como escala para el transporte de armas hacia el Oriente Medio y el Golfo Pérsico. No hace tanto que se estrelló un avión repleto de armas para Irán.

Casi al mismo tiempo, el órgano oficioso de la OTAN, el periódico **Atlantic News**, señalaba que el **Consejo Hispano-Americano** — cuya formación fué decidida en el mencionado **Tratado de Amistad y Cooperación** — no es en realidad sino un medio para reforzar la vinculación de España a la OTAN y para preparar su ingreso en ella.

Una mayor dependencia militar directa de los Estados Unidos y la preparación, de tapadillo, del ingreso en la OTAN: tales son dos de los rasgos fundamentales de la política internacional de la monarquía y de su Gobierno. Todo ello es sumamente expresivo y prueba claramente hasta qué punto se está procediendo a subordinar España a los Estados Unidos — más aún que en el último período de la vida de Franco — y a insertarla totalmente en el bloque militar agresivo que encabeza el imperialismo norteamericano.

No hace falta decir que todos estos pasos que está dando la monarquía, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y desde luego sin consultar a la población acerca de unas decisiones de tal importancia, suponen nuevas amenazas para nuestro presente y para nuestro futuro.

Es de lamentar que numerosos partidos que se proclaman demócratas pasen por alto estos gravísimos hechos.

Semejante silencio, semejante desinterés por parte de quienes reciben el apoyo de las internacionales socialistas, demócrata-cristiana, liberal, etc., es una prueba evidente de que mal pueden luchar por la independencia, la soberanía y la neutralidad, aquellos que empiezan por echar por la borda la independencia de su propio partido, en favor precisamente de los partidos extranjeros que gobiernan en los países pertenecientes a la OTAN.

Sahara:

Un año del Acuerdo Tripartito

Ahora va a cumplirse el año del día en que se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, que consagró la venta del Sahara por parte del Gobierno franquista a los invasores marroquíes y mauritanos.

Con esta ocasión, se prevé la realización de toda una serie de actos destinados a demostrar la repulsa que los pueblos del Estado español por el indigno comportamiento del Gobierno de Madrid, y en pro de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática.

El Movimiento Comunista llama a sus militantes, simpatizantes y amigos a participar masivamente en dichos actos.

ELLOS

"Aunque a algunos no nos guste, tenemos que abrirnos a unos nuevos modos de vivir...", declaró Emilio Rodríguez Román, director general de Seguridad, con ocasión de un reciente viaje a Zaragoza. Curiosamente, al día siguiente la prensa recogía estas declaraciones con una ligera variación: "Aunque a algunos no les guste...", habían escrito las agencias de prensa.

Y es pena, porque el verdadero valor de la frase estaba precisamente en ese "nos". Es a ellos precisamente a los que no les gusta. Son ellos precisamente los que ven la democracia como una fatalidad, como algo no por inevitable menos repugnante. Ellos: no sólo Rodríguez Román, sino también los otros muchos que —en la Policía, en la Guardia Civil, en el Ejército, en el Gobierno, en la administración— piensan, sienten y se identifican con el mismo pasado — ¡y con el mismo presente! — de fascismo.

Pena que no todos ellos sean tan sinceros como el nuevo director general de Seguridad. Y pena de censura.

Demócratas consecuentes, quisiéramos romper una lanza desde estas páginas en favor del derecho de D. Emilio Rodríguez Román a expresarse libremente.



Un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano

—por Jaume Peris—

Uno de los temas más polémicos de estos últimos tiempos viene siendo el del Estatuto de Autonomía para el País Valenciano. Sobre esta cuestión se han expresado criterios encontrados en el seno de la oposición. Hemos dicho que consideramos urgente que las fuerzas democráticas valencianas alcancen un criterio unitario, y que nuestro Partido aceptará ese criterio. No obstante, ello no quiere decir que el Movimiento Comunista sea "indiferente" o "neutral" en esa polémica. El compañero Jaume Peris, dirigente del Moviment Comunista del País Valencià, explica en el siguiente artículo nuestro punto de vista sobre esta importante cuestión.

El País Valencià quiere autonomía política para recuperar su personalidad nacional, resolver sus asuntos específicos, democratizar su vida y decidir con libertad su futuro. Su alcance lo determinará el Estatuto donde se fijaran las atribuciones del gobierno, del parlamento y de los tribunales de la Generalitat valenciana, nombre tradicional de nuestras instituciones autónomas.

Pero lo que está hoy a la orden del día es como debe ser conseguido, elaborado y aprobado ese Estatuto. Las fuerzas democráticas valencianas consideran que dentro del período constituyente del Estado Español, en el País Valencià se ha de iniciar un proceso constituyente propio en el que se elija por sufragio universal una Asamblea cuyo objetivo central será redactar el Estatuto, el cual después tendrá que ser ratificado en un plebiscito. Y para que este proceso estatutario sea realizado libremente, es necesario que se forme un Consell Provisional de la Generalitat con el poder suficiente para asegurar que tenga un desarrollo limpio y democrático. Esto es imprescindible para que se haga sin recelos, con garantías de que no se usarán los medios de comunicación a favor de las ideas despóticas del centralismo y de que no se utilizarán los hilos del poder central en contra de los partidos valencianistas.

Nuestra organización ha sido y es uno de los grupos que más han luchado para que se reconociese que esta es la manera adecuada para que el Estatuto se confeccione democráticamente. En la actualidad continuamos apoyando sin reservas que así se haga.

Nos mantenemos más firmes si cabe en esta postura al haberse logrado que el conjunto de las fuerzas de la oposición, la gran mayoría, así lo hayan asumido. La

Taula lo recoge en su quinto punto programático. Otra razón es comprobar el auge que el movimiento a favor del Estatuto de Autonomía tiene en estos momentos. En todas las grandes manifestaciones que se vienen celebrando es una consigna central, incluso los 50.000 campesinos que se concentraron en Valencia el pasado septiembre gritaron sobre todo "Estatut d'Autonomía" y "País Valencià". Asimismo, se vienen adheriendo a esta reivindicación las Asambleas Democráticas que se están creando con vistas a la constitución de la Asamblea del País Valencià.

Sin embargo, distintas organizaciones, basándose en diversos argumentos, han regateado a la Taula y a los valencianos el apoyo a la formación del Consell Provisional de la Generalitat desde el mismo momento de la ruptura, cuya finalidad es garantizar nuestro propio proceso constituyente.

Se ha argumentado que como el País Valencià no llegó a aprobar durante la República su Estatuto, nuestra reivindicación no tiene la legitimidad necesaria para darle soporte. No se tiene en cuenta que las cosas han cambiado en cuarenta años, hasta llegar a hoy en que las fuerzas democráticas y los ciudadanos valencianos se unen alrededor de este objetivo. Tampoco que la legitimidad se puede alcanzar no sólo con los votos (ahí está la proclamación de la Generalitat de Catalunya por Francesc Macià en 1931). No deja también de ser curioso que quienes solo quieren oír hablar de la restitución de los Estatutos plebiscitados en los años treinta, no reivindiquen la restauración de la Constitución republicana.

Al exigir un Consell Provisional de la Generalitat — se nos dice — estáis ponien-

do un obstáculo a la ruptura, pues ello va a dificultar la negociación con las fuerzas del régimen. Realmente cualquier objetivo consecuentemente democrático — y no sólo éste de la Taula — va a ser duro de tragar a esas fuerzas enemigas de la libertad. Pero no es ese el punto de vista fundamental que debemos adoptar los demócratas a la hora de fijar los objetivos democráticos mínimos, sino el de las aspiraciones y resolución del pueblo, en este caso el valenciano. Además, ¿acaso la lucha popular no puede hacer que se vean obligados a cambiar de opinión — o a guardársela en el bolsillo — los partidarios del centralismo despótico?

Se nos dice también que detrás de nosotros vendrán otros pueblos pidiendo formas de autonomía desde el mismo momento de la ruptura, con lo que nos acecha el peligro del cantonalismo. No parece, en absoluto, que el peligro que se cierne sobre los pueblos del Estado Español sea ese, sino el de que se les continúe negando sus derechos nacionales — o que les sean recordados o limitados — por el régimen o las fuerzas que escudan sus intereses en el centralismo. Por otra parte, el riesgo de una aventura no existe ni en el País Valencià ni en las otras comunidades que piden autogobiernos provisionales, ya que hay las fuerzas dispuestas a responsabilizarse de ponerlos en marcha.

Los demócratas hemos de ver en las aspiraciones de la Taula y de los valencianos una justa y urgente reivindicación de libertad nacional que hemos de asumir, que va a reforzar la lucha por la ruptura consecuente con estos últimos cuarenta años y facilitar una convivencia libre y democrática entre todos los pueblos del estado.

Así parece que empieza a entenderse.

Las "medidas económicas" del Gobierno

El peor continuismo

—por Raúl Fernández—

El famoso "paquete"

Tras muchas dudas, el Gobierno se ha decidido al fin a sacar sus medidas económicas, destinadas a asegurar el proceso de transición hacia sus elecciones.

El Gobierno ha reconocido la gravedad del momento: inflación, paro, desequilibrio exterior, fuerte depresión de la actividad económica, crecientes desigualdades regionales, escasa recaudación de impuestos... Pero el Gobierno, que no ha apuntado a las causas de tales problemas, ha anunciado que tampoco tiene la intención de lanzarse a solucionarlos a fondo. Se propone, lisa y llanamente, capear el temporal hasta el momento de las elecciones.

Basta, en efecto, con ojear el conjunto de las medidas adoptadas para ver que ninguna de ellas permite solucionar, así sea mínimamente, los problemas fundamentales de la economía española. Por no hablar de la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores. Naturalmente que estamos apuntando hacia problemas que tienen su raíz misma en el sistema capitalista, y que no podrán ser resueltos mientras éste perviva. Pero es que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Suárez vienen a agudizar la ya de por sí altísima irracionalidad y el enorme grado de explotación en que se basa el

capitalismo español.

El paro aumentará. Sigue en pie la utilización del crédito barato de la Banca oficial y de las Cajas de Ahorro en inversiones del gran capital, que se caracterizan — amén de por su dudosa necesidad — por crear muy pocos puestos de trabajo. Seguirán, y probablemente se agudizarán, las limitaciones de crédito para la pequeña y mediana empresa, con lo que disminuirán los puestos de trabajo sin aparecer otros nuevos. Se prohíbe la reducción de la jornada laboral o el aumento de las vacaciones en el curso de la negociación de los convenios. Y, como broche de oro, queda suprimido el artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales, legalizando el despido con una indemnización mínima.

El tema de los precios es tratado con una desfachatez digna de mejor causa. Se hará una lista de productos cuyo precio habrá de subir menos que los demás, que aumentarán según sus costes de producción. La experiencia ha demostrado sobradamente lo que esto supone: subidas superiores a los aumentos reales de los costes. Añádase la pintoresca medida de congelar los precios por espacio de dos meses. ¿Generosidad a plazos? No: se trata de frenar el aumento del índice del coste de la vida durante el plazo en que ese índice se contabilizará para los aumentos salariales de los próximos convenios. En enero los precios se volverán a disparar, y los trabajadores habrán perdido con esta "congelación"

temporal.

El aumento del 200% en los impuestos sobre las importaciones tendrá una eficacia muy limitada en la reducción de importaciones, pero conseguirá, en cambio, repercutir en el aumento del precio de los productos importados. Siguen, como se ve, las medidas populares.

En fin, y con el pretexto de ahorrar energía, suben las tarifas eléctricas a partir de un cierto nivel de consumo, conforme a criterios tales que repercuten más en el consumo doméstico que en el industrial, y más en las industrias medianas que en las grandes.

Sobre los restantes grandes problemas económicos no encontramos sino vaguedades, tópicos y medidas de poco valor, por no hablar de las que resultan tan grotescas como esa limitación de la velocidad en carretera, que pasa de 110 Km/h. a 100 Km/h., que, si bien no servirá para ahorrar energía, dará buenos ingresos a la Guardia Civil en concepto de multas.

A esto es a lo que el Gobierno ha llamado "medidas de saneamiento económico".

La operación de "saneamiento"

Las líneas anteriores ya nos permiten ir viendo qué entiende el Gobierno por "saneamiento". Aumentar el paro (con lo que tal situación supone de permanente chantaje para los trabajadores), presionar para que bajen los salarios, facilitar la represión patronal sobre el sector más combativo de la clase obrera — mediante las facilidades para el despido —. Pero, por encima de todo ello, "saneamiento" quiere decir congelación salarial. He aquí el punto clave de las medidas del Gobierno. Se ha suprimido de hecho la contratación colectiva, al limitar el tiempo de negociación a un máximo de diez días y al garantizar por ley al empresario que el laudo se dictará inmediatamente y que éste se establecerá sobre la base de un aumento superior en un 20% al índice oficial del coste de la vida.

El interés que el Gobierno tiene en esta medida se centra en el rebajamiento de la capacidad de consumo popular, en el descenso de las rentas salariales (sabida es la falsedad del índice oficial del coste de la vida, muy infe-



El pueblo trabajador debe cortar por lo sano con los intentos de hacerle pagar los platos rotos del capitalismo. (En la foto, Asamblea de CC.OO. en Burgos).

El 12 de Noviembre, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales:

GRAN JORNADA OBRERA DE PROTESTA Y LUCHA

rior al real), con el fin de mantener deprimida la actividad económica con un alto nivel de paro, que a su vez repercute en la reducción de los salarios.

El conjunto de estas medidas conduce al mantenimiento de la crisis económica, en unas condiciones tales que sólo los sectores monopolistas (los mejor instalados en el poder del Estado) podrán hacer frente, e incluso sacar partido, de la situación. Los monopolistas aumentarán su tasa de beneficios a costa del rebajamiento de los salarios, buscando así una base sobre la cual relanzar su crecimiento capitalista. Conseguirán asimismo acabar en su beneficio con cierto número de pequeñas y medianas empresas. Estamos, en definitiva, ante la clásica reaccionaria política capitalista de servir de la crisis para "ajustar las cuentas" a los trabajadores, redistribuyendo las rentas a su favor. Y estamos, más en concreto, ante la típica utilización del poder del Estado fascista, en el más puro estilo de nuestros últimos 40 años.

Con "demócratas" como Suárez, ¿para qué podrían hacerle falta a la burguesía los fascistas?

La crisis económica y el cinturón de los trabajadores

El continuismo franquista está apostando muy fuerte, tanto en el terreno político como en el económico. Defendiendo sus intereses a capa y espada, no retrocede en una política que conduce de hecho a un auténtico sabotaje de la economía y al empobrecimiento de la inmensa mayoría. Busca crear un clima de miedo, incertidumbre e indecisión para servirse de él: como medio para la conservación de sus privilegios económicos y como freno a la lucha por la ruptura democrática.

El pueblo trabajador debe cortar por lo sano con los intentos de hacerle pagar el costo de una situación que él no ha traído y que, por lo demás, puede ser superada, a condición de liquidar realmente cuentas con la casta franquista. Ya ha oído hablar bastante de crisis; ya ha oído hablar demasiado de apretarse el cinturón. La lucha por la satisfacción de sus reivindicaciones elementales debe ser impulsada con todas sus consecuencias. Ella habrá de contribuir decisivamente a que aparezcan las condiciones que permitan superar las mil y una crisis en las que hoy, tras cuarenta años de dictadura fascista del gran capital, está sumida nuestra sociedad.

El "otoño caliente" ha dejado, por obra y gracia del Gobierno de Suárez, de ser una amenaza para convertirse en una realidad.

Las medidas económicas recientemente dictadas — medidas que comentamos junto a estas líneas — representan una auténtica provocación al conjunto de los trabajadores. Que no esperen resignación, que no se molesten en esperar comprensión y colaboración — como tienen la desfachatez de reclamar — para un conjunto de medidas destinadas a que los trabajadores las pasen moradas y ayuden a los grandes capitalistas a poner parches en su propio caos económico.

Ante toda esta serie de agresiones se impone una amplia campaña de denuncia para desenmascarar semejantes medidas, para hacer ver que se trata ni más ni menos que de un desesperado intento de cargar sobre las clases populares las consecuencias al cien por cien de la crisis económica. Y se impone, por encima de todo, la más amplia movilización para exigir que sean retiradas. Hay que acumular todas las fuerzas para echar abajo a este Gobierno antidemocrático y reclamar un Gobierno que responda a las exigencias de libertad y justicia del pueblo y que cuente con autoridad frente al capital para relanzar la economía y dar satisfacción a las más urgentes necesidades de las masas trabajadoras.

En los días pasados la COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) ha lanzado una convocatoria para un paro general de 24 horas a realizar el día 12 de Noviembre en respuesta a la política económica del Gobierno.

Desde estas páginas saludamos y apoyamos con todas nuestras fuerzas esta iniciativa y llamamos a todos los trabajadores a prepararla para hacer de ella una gran jornada de protesta y de lucha:

- Contra la congelación salarial, por un aumento de 6.000 ptas. lineales para todos los trabajadores.
- Contra el desempleo, reclamamos puestos de trabajo y seguro de paro suficiente y para todos.
- Contra el despido libre, exijamos garantía en el empleo y amnistía laboral.
- Contra la reforma sindical con la que amenaza el Gobierno, por la desaparición de la CNS y la libertad sindical.
- Por las libertades democráticas más amplias, por un Gobierno capaz de atender las exigencias de las masas trabajadoras.

La Internacional Socialista y las barbas de Portugal

A nuestras manos ha llegado recientemente un interesante documento. Se trata de unos apuntes que resumen el contenido de una discusión interna entre altos dirigentes de la Internacional Socialista. La discusión se celebró en Estocolmo, allá por agosto de 1975, recién clausurada la Conferencia de Helsinki, y tomaron parte en ella hombres tales como Olof Palme, Harold Wilson, Callaghan, Mario Soares, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Ben Uyl, Joergensen, Francois Mitterrand, Isaac Rabin y otros.

Antes de cualquier otra cosa, convendrá decir que, hecho público el documento, no ha habido por parte de la Internacional Socialista ninguna intervención destinada a desmentirlo, a poner en duda su autenticidad. Todo parece indicar, en consecuencia, que su contenido es exacto.

El documento — que recoge diferentes intervenciones de una discusión sobre la situación en Portugal — es extraordinariamente revelador de la ideología, las opciones políticas fundamentales y los métodos de acción de los dirigentes de la Internacional Socialista.

En el plano ideológico-político (¡lástima no poder reproducir el documento entero!) hay intervenciones de lo más definitivas. Así vemos a Mario Soares, dirigente máximo del Partido Socialista portugués, hablar de los planes del “comunismo internacional” como enemigo principal; de “la resistencia de la Iglesia frente al comunismo” como factor positivo; del papel básico del PS portugués en el freno del movimiento independentista de determinados enclaves coloniales (“Las islas de Azores y Madeira — dice Soares literalmente — siguen unidas a Portugal por causa nuestra; si no, irían a la independencia”); de la necesidad de mantener “la autoridad del Estado”; de la urgencia de una “tregua” en las nacionalizaciones y del aumento de inversiones extranjeras; de su “sorpresa” por “la resignación y la pasividad de los Estados Unidos”...

Pero dónde el carácter escandaloso de la posición de estos líderes de la I.S. aparece con más evidencia es a la hora de referirse a los métodos de acción. Por un lado, el documento revela cómo Soares invita a la socialdemocracia europea a presionar políticamente sobre la situación portuguesa, utilizando para ello la ayuda económica del Mercado Común; cómo pide que intervengan sus amigos ingleses y

alemanes sirviéndose de las emisiones radiofónicas de la B.B.C. y de la Radio Alemana (*); cómo solicita la financiación del P.S.P. (“Necesitamos dinero de los Partidos Socialistas y de los Sindicatos — dice Soares —. La Socialdemocracia Alemana ha hecho un gran esfuerzo, pero el P.S.P. tiene grandes dificultades.”); cómo reclama instructores militares extranjeros; cómo especula con la posibilidad de instalar una radio pirata en aguas portuguesas (“Tenemos una proposición en firme de Zurich.”), etc., etc.

Por su parte, los otros líderes social-demócratas presentes en la reunión se expresaron sobre el tema situándose en ese mismo terreno. Willy Brandt, por ejemplo, habló concretamente de intervenir en la situación portuguesa a través de la radio, de la acción sobre los emigrantes portugueses, de la ayuda directa, de la invitación a Alemania de líderes del Movimiento de las Fuerzas Armadas, etc. Joergensen sugirió la posibilidad de que su Gobierno invitara a Otelio Saraiva de Carvalho para presionar sobre él. Estos y los demás se mostraron igualmente de acuerdo con las otras fórmulas de intervención sugeridas por Soares.



La conclusión que cabe sacar del documento salta a la vista: los líderes de la Internacional Socialista carecen del más mínimo sentido del respeto por la soberanía y la independencia de los pueblos, y violan abiertamente el derecho de los pueblos a determinar libremente su futuro al margen de toda presión e intervención extranjeras.

(*) Poco después pudo saberse que la B.B.C. había despedido a varios periodistas de sus emisiones en lengua portuguesa, periodistas a los que se les reprochaba sus ideas pro-comunistas.

“Quizás no sea bueno — dijo en un momento de la reunión F. Mitterrand, líder del P.S. francés — que el P.S.P. aparezca como recibiendo las directrices del exterior.” No, no es bueno que **aparezca** así, porque no es bueno que **sea** así. No es bueno que que haya partidos que actúen como instrumento de fuerzas exteriores.

El documento citado pone suficientemente de manifiesto de qué modo inaceptable actuaron algunos miembros de la Internacional Socialista con respecto a Portugal. Y ello no puede por menos que recordarnos el viejo refrán castellano: “Cuando las barbas de tu vecino...”

Se ha hablado de que la Internacional Socialista va a abordar en una de sus próximas reuniones la problemática del Estado español...

Se ha hablado de que Brandt, Palme, Mitterrand, Wilson, etc., van a asistir como invitados al Congreso del Partido Socialista Obrero Español...

Al alcance de todos está apreciar el contenido de las emisiones en lengua española de la B.B.C., de Radio Munich, de la Radio holandesa...

En Madrid han empezado a instalarse determinadas oficinas vinculadas al Partido Social-demócrata Alemán...

Pensamos que va siendo hora de que saquemos nuestras barbas a remojo: no queremos que nuestra tierra vea una segunda versión de actuaciones del estilo de las que acabamos de enumerar.

Estamos seguros de que, al expresarnos así, manifestamos un sentimiento que es común a la inmensa mayoría de los militantes del Partido Socialista Obrero Español, miembro de la Internacional Socialista.

Hay que acabar con esto: con lo que ya ha empezado a darse. Hay que poner coto a la intervención de los intereses extranjeros en los asuntos internos de la política del Estado español a través de unas u otras fuerzas, lleven éstas etiqueta de demo-cristianas, de liberales, de socialistas o de lo que sea.

Todas las opciones democráticas son lícitas: las respetaremos, aunque no las compartamos. Lo que no es lícito, lo que no merece respeto alguno, lo que no hay que tolerar es el juego en nuestro suelo de los grandes intereses internacionales.

Superando la confusa situación de los últimos meses, las CC.OO. han decidido abordar en firme la tarea de su formalización como organización sindical. Para nosotros esto es un paso claramente positivo; la actual situación del movimiento obrero — con una preocupante proliferación de siglas sindicales del más variado signo, y con un riesgo creciente de atomización y división sindical — así lo exigía.

Como primera medida, la Coordinadora General de CC.OO., en su reunión del día 17, ha acordado iniciar un proceso de afiliación de todos los trabajadores que lo deseen. Se trata con ello de integrar primero en CC.OO. a toda la masa de trabajadores que hoy marcha a su lado y las apoyan, para que puedan participar con plenos derechos en el proceso de configuración del sindicato, proceso que ha de tener su culminación en los Congresos de nacionalidad y región y en el Congreso General de CC.OO., a celebrar cuando haya condiciones políticas favorables. Esta también es una medida positiva que nuestro Partido venía exigiendo con fuerza, para que la formalización de CC.OO. como sindicato no fuese obra de unos pocos, sin dejar otra opción a las decenas de miles de trabajadores que hoy están con CC.OO. que afiliarse o no a algo ya completamente hecho, sin ninguna participación por su parte.

Ciertamente, todo esto es positivo; pero igualmente cierta es la existencia de problemas graves en CC.OO., de profundas diferencias en lo concerniente a la forma de conducir el proceso de su formalización como sindicato y a las mismas características que este sindicato debe reunir. En el fondo, el problema es este: ¿se dirigen las CC.OO. a su conversión en un sindicato con un pluralismo de corrientes ideológicas y políticas dentro de él, con un funcionamiento plenamente democrático, heredero de la tradición unitaria de CC.OO. — y con una línea de acción claramente orientada a la consecución de la unidad sindical —, comprometido en la plena potenciación de la combatividad de las masas trabajadoras, o, por el contrario, van hacia un sindicato monocolor, burocratizado, correa de transmisión de un partido y más atento al control de las masas que a su movilización?

En estas mismas páginas denunciábamos hace poco la acción emprendida por el P.C.E. de instrumentalización de las CC.OO. en beneficio de sus intereses partidistas. Acciones de ese tipo son las que empujan a CC.OO. a su conversión en un sindicato monocolor, correa de transmisión de ese partido y, por tanto, factor de división sindical. Es necesario oponerse a ellas con firmeza.

Los acuerdos de la última Coordinadora General, decidiendo por arriba tanto la construcción, sin más requisitos, del Sindicato de CC.OO., como la estructura que éste ha de tener desde ahora mismo y a todos los niveles; la oposición de los dirigentes de CC.OO. identificados con el PCE a la adopción de formas de funcionamiento que aseguren una auténtica democracia interna en la vida de las Comisiones;

CC OO en la encrucijada

su negativa al reconocimiento de la plena autonomía de las CC.OO. de las nacionalidades y regiones... Todo ello representa una línea de actuación que, de acabar por imponerse, conducirá a las CC.OO. a su conversión en un sindicato burocratizado, monocolor y separado de la acción combativa de las masas trabajadoras.

Para que CC.OO. se configure como un sindicato unitario, democrático, ligado a la acción de las masas, el camino a seguir debe ser otro bien distinto:

● En primer lugar, el proceso de formalización de CC.OO. como sindicato exige la plena participación en el mismo, y en todos sus aspectos, de la masa de trabajadores que en los meses inmediatos se afiliarán. Desde el nombre de la nueva Central, o, las estructuras internas de la misma, hasta sus estatutos y el programa, todo debe ser decidido con el concurso de los afiliados. Proceder ahora, incluso previamente a la afiliación, a la resolución de buena parte de las cuestiones señaladas, es tanto como negarles a los afiliados su participación en la configuración en la nueva central e imponer burocráticamente las decisiones de una minoría políticamente organizada.

● En segundo lugar, el reconocimiento del principio de soberanía de los Congresos de nacionalidad y región. Esto significa que tales Congresos de CC.OO. han de tener capacidad para decidir sus propios estatutos de funcionamiento, la forma de organización que más conviene, de acuerdo con sus condiciones específicas y definir un programa de actuación propio para su ámbito territorial.

● En tercer lugar, asegurar dentro de CC.OO. unas normas de funcionamiento que garanticen la democracia interna, que aseguren la posibilidad de acceso a los órganos de dirección de las Comisiones, a todos los niveles, de los militantes que no pertenecen a ningún partido, así como de las diferentes corrientes existentes en CC.OO. Para ello es necesario admitir la presentación de candidaturas diversas para to-

do tipo de elecciones y la formación de los órganos dirigentes con miembros de las diferentes candidaturas, en forma proporcional al apoyo de los afiliados obtenido por cada una de ellas. Igualmente, es necesario establecer para las cuestiones de importancia la norma de que las decisiones se adopten por mayoría cualificada, de 2/3 o 3/4 de los votantes. El funcionamiento democrático de CC.OO. exige asimismo el reconocimiento de los plenos derechos de los afiliados a decidir en todas las cuestiones de la vida interna de la organización y al control sobre la actuación de los órganos de dirección y sobre el empleo de los fondos económicos; la no distinción en este terreno entre los afiliados y los no afiliados, en vez de contribuir a un funcionamiento más democrático, a lo que conduce en la práctica es a la negación de los derechos de los afiliados y a posibilitar el pleno control de la organización por éste o aquél grupo político.

● En cuarto lugar, que las CC.OO. se comprometan a impulsar en los centros de trabajo organismos unitarios elegidos en asambleas de todos los trabajadores y a favorecer la coordinación entre estos organismos, por encima del marco de la empresa. Es aquí donde hoy se ha de concretar una práctica de unidad sindical que supere, aunque sea parcialmente, la situación de pluralismo y división que se da en la actualidad.

● Por último, y de cara a contribuir a la independencia de las CC.OO. con respecto a los partidos políticos, establecer un claro principio de incompatibilidad entre la condición de dirigente de las CC.OO. y la actuación pública en nombre de éste o aquél partido.

En torno a estas posiciones se produce hoy en CC.OO. un agrupamiento de militantes independientes, cristianos, miembros de nuestro Partido, del Partido Carlista, LCR, PSP... dando vida a una corriente unitaria que aspira a la defensa del carácter abierto que siempre ha caracterizado a las CC.OO., y a la implantación de un auténtico funcionamiento democrático de las mismas.

Esta corriente unitaria no es una mera alianza de partidos. Por encima de todo, se trata de defender unas posiciones que responden al sentir y a las aspiraciones de una amplia base de las CC.OO. y de favorecer la acción conjunta y colectiva de todos los que las defiendan, pertenecientes o no a cualquier partido. Para nuestro Partido lo importante es organizar la acción de todos los militantes de CC.OO. que aspiran a que éstas mantengan vivas sus tradiciones unitarias y cumplan el papel de contribuir decisivamente a la formación de un Sindicato unitario, realmente democrático e independiente de los partidos. Y para cumplir ese objetivo, es necesario que ellas mismas se ajusten a tales características desde el primer momento. A nuestro modo de ver esto es precisamente lo que está en cuestión en estos momentos, y por ello se exige una conjunción de esfuerzos de todos cuantos defendemos esta línea de actuación.

Juan Carlos, Pinochet y Cía.

"El Estado de sitio es en Colombia la situación normal", declaró el ilustre embajador de ese país latinoamericano, días antes de la visita de los reyes.

Para manifestar su apoyo y su solidaridad con un gobierno fascista como es el colombiano, que mantiene a su pueblo en la más absoluta miseria y tiene vendido su territorio y su economía por parcelas a los imperialistas yanquis, se han desplazado allí Juan Carlos y Sofía. Su gira colombiana ha sido toda una muestra de lo que son unas relaciones internacionales ampliamente reaccionarias. "Dime con quien te juntas..."

Comidas, banquetes, discursos en

los que el sueño imperialista de la Hispanidad hacía de telón de fondo. Abrazos y expresivas manifestaciones mutuas sobre los lazos "entrañables" que unen al régimen español con sus compadres latinoamericanos — así Pinochet, así Somoza, para quienes el régimen franquista es todo un modelo —, la tradición, la raza, los valores eternos...

El resultado político más comentado del viaje real se contiene en el proyecto presentado por Juan Carlos de constituir "una Comunidad de países hispánicos", a través de la cual "se estrecharían aún más los lazos que unen a la Madre Patria con los países de la América española". Este proyecto — todo hay que decirlo — recibió la más calurosa acogida en las pá-

ginas del "Mercurio", portavoz de la Junta Chilena, y el aplauso de todos los "gorilas" del continente latinoamericano.

Frente a los que, como nosotros, propugnamos una política de neutralidad ante los bloques imperialistas y de amistad con todos los países y pueblos, frente a los sectores democristianos y socialdemócratas de nuestro país que vuelcan sus miradas en las relaciones con los regímenes de Europa occidental, la monarquía ha elegido una nueva vía. La "tercera vía" de Juan Carlos es la del pacto con lo más negro de la reacción internacional enfeudada al imperialismo yanqui. Ahora ya sólo falta saber en qué se diferencia esa vía de la que ha seguido durante cuarenta años el fascismo español.

En enero de 1975 se aprobó el Plan Energético Nacional (PEN) para el período 1975-85. En él se señalaba que la creciente subida de precios y escasez de petróleo, así como la dependencia exterior, hacían urgente la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Esta energía, según el PEN, será principalmente la nuclear. Para ello, y contando con el incremento de las necesidades de consumo de energía, se disponía la construcción de 25 centrales nucleares, con una elevadísima inversión en equipo, tecnología y uranio importados. Si, como señala muy justamente el PEN, de lo que trata es de diversificar e independizar nuestras fuentes de energía para ahorrar, hay que reconocer que esta es una curiosa forma de lograrlo.

En 2 años de Plan, resulta que la construcción de una central se ha encarecido en un 50 0/0 y el precio del uranio se ha triplicado, mientras que el del petróleo se viene estabilizando. Resulta también que el aumento del consumo previsto ha sido 10 veces mayor que el realmente producido. Según parece, en plena crisis económica, no se pudo prever sus efectos sobre dicho consumo. Crisis y ahorro, sin embargo, no parecen importar demasiado cuando las centrales nucleares sólo son capaces de transformar en electricidad 1/3 del calor que producen.

Dónde no se equivocaron nuestros "planificadores", fue a la hora de plantear la construcción de las centrales: venían funcionando 3, y las empresas eléctricas ya habían decidido la instalación de otras 17, cuando el Ministerio de Industria elaboró el PEN. No tuvo, pues, más que recoger las decisiones tomadas ya por esas empresas. A pesar de que centrales como Lemóniz I y II o Ascó I y II se levantaban sin las autorizaciones precisas, y a pesar de que otras, como Ascó I, no respetan la distancia mínima frente a los núcleos urbanos.

SORIA NUCLEAR ¡NO!

Y eso que nuestra legislación, en cuanto a seguridad y niveles de contaminación tolerables, está unas 100 veces por debajo de las normas norteamericanas. Modelos anticuados, con medidas de seguridad insuficientes para los requisitos exigidos en USA, son exportados por Westinghouse y General Electric a otros países. La tecnología es insuficiente y experimental, ya que no se han llegado a resolver los graves problemas de seguridad, refrigeración, contaminación del aire y del agua, residuos radiactivos, etc. Los intereses de las multinacionales pueden más que la defensa de los pueblos ante peligros que nada tienen que ver con el progreso.

El caso de Soria es contundente. La base del proyecto es el plutonio, veneno más radiactivo y menos experimentado que el uranio. Sus residuos permanecen activos millares de años. Las inevitables radiaciones que contaminan agua y aire en una central en funcionamiento, tienden a concentrarse en ciertos organismos y a penetrar en las cadenas alimenticias, bien sea en productos agrícolas o animales, que

son precisamente las fuentes de riqueza de esta provincia marginada. Y en caso de accidente, ¿quién pagará a los agricultores la pérdida de sus cosechas? Según la ley, la compañía tiene un riesgo objetivo, limitado a una cifra máxima de 350 millones de pesetas. Con todo, lo más grave e irreparable, son los daños en las personas. Según prestigiosos científicos, aumentan los tumores en los adultos y la mortalidad y malformaciones infantiles.

No hay que olvidar que han sucedido varios accidentes en el mundo. Incluso la Junta de Energía Nuclear, responsable del proyecto soriano, ya contaminó Manzanares, Jarama y Tajo en un accidente que (¿cómo no!) fué silenciado por las autoridades.

Por otra parte, el plutonio es la materia prima de la bomba atómica. Areilza declaraba a la TV americana (6-3-76): "España puede ser una potencia nuclear en breve plazo". ¿Será éste otro interés oculto en juego? ¿Por qué no podemos informarnos y decidir sobre un problema que tan grave y directamente nos afecta a todos los pueblos del Estado español?

En todo caso, los sorianos han levantado un movimiento de protesta ante la amenaza nuclear similar al que ya se ha desarrollado en otros puntos: Costa vasca, Valencia de S. Juan, Chalamera, Vandellós, etc. Es necesaria y urgente una decidida presión para lograr detener las instalaciones actuales y las previstas, hasta que existan garantías probadas de seguridad. Hay otra energía (solar, geotérmica, etc.) no contaminante que, con la debida investigación, pudiera aprovecharse de inmediato y a bajo precio. Sólo "perderíamos" el control que sobre aspecto tan vital de nuestra economía, ejerce el capitalismo mundial. Esa parece precisamente ser la preocupación de nuestros "patrióticos" gobernantes.